

El ambiguo entorno de una coyuntura: la elección presidencial del 2006

Luis H. Méndez B.

El entorno de la coyuntura electoral del 2 de julio del 2006 no se limita al tiempo de lucha partidaria estipulado, reglamentariamente, por una democracia procedimental¹. Abraza más historia: comprende muchos más sucesos; trasciende, incluso, al gobierno foxista y su compulsivo esfuerzo por impedirle a la izquierda mexicana partidaria el acceso al poder. Descifrar la trama que construyó este momento histórico, nos obliga a dilatar el tiempo: instalar nuestro recuerdo en 1983, traer a la memoria las desgraciadas circunstancias, las insensatas actitudes adoptadas desde el poder que obligaron a la clase política y a la fragmentada sociedad mexicana a iniciar un sufrido proceso de transformación de las viejas instituciones nacionalistas, proceso que, todavía el día de hoy, sigue inconcluso. La promesa de reformar el Estado y crear un nuevo proyecto nacional, apoyado en un también nuevo pacto social, continúa enredada en los ambiguos y ambivalentes comportamientos de cuatro gobiernos, técnicamente definidos como neoliberales, que no han logrado superar los retos planteados por la coyuntura del 1 de septiembre de 1982.

Algunas precisiones iniciales

No vamos a calificar la historia mexicana, a partir de 1983, como un tiempo corto caprichoso que expre-

sa la más engañosa de las duraciones; tampoco vamos a entenderla como una historia de los acontecimientos que causa desconfianza al historiador por su liviandad, por su ligereza. Sí, creemos con Braudel que es lícito desprenderse del “tiempo exigente de la historia”, y comprendemos también el imperativo de volver a él con otra mirada, con otras inquietudes, con otras preguntas. Sólo que, pensamos, en este caso, todos los niveles, todos los miles de niveles, todas las miles de fragmentaciones del tiempo de la historia, que antes terminaban comprendiéndose siempre en la profundidad,

en la semimovilidad de la estructura creada por el nacionalismo revolucionario, hoy ya no se comprenden, al menos de manera total, a través de ella. Los acontecimientos ya no tienen un tiempo largo donde explicarse a totalidad, pero tampoco cuentan con otra densidad histórica donde puedan interpretarse cabalmente².

A partir del día 1 de enero del año señalado, iniciamos un tiempo de indefinición donde, creemos, comien-

* Profesores-Investigadores, Departamento de Sociología, UAM-A.

¹ Siguiendo a Bobbio, entendemos por democracia procedimental el conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo que procedimientos. Es una democracia restringida a su aspecto electoral. Véase Norberto Bobbio, *El futuro de la democracia*, FCE, México, 1984.

² Acerca de los tiempos cortos y largos en la historia, véase Fernand Braudel, *La Historia y las Ciencias Sociales*, Alianza Editorial, México, 1989, punto 3, “La larga duración”, pp. 60-106.

za a construirse un nuevo tiempo mexicano, una nueva estructura histórica —quién sabe de qué espesor y duración— hasta hoy definida por la ambigüedad y por la ambivalencia; por la incertidumbre, la contingencia y el riesgo que comandan los procesos sociales en México, así como el proceder de sus instituciones, en su conflictivo y confuso tránsito a una sociedad de libre mercado, inserta en las redes de un mundo global que no termina por nacer, que todavía, después de casi un cuarto de siglo, no logra superar las representaciones simbólicas que le heredó un ya viejo orden nacionalista, de autoritaria protección, empeñado, aun en su agonía, en sobrevivir.

Si tomamos, siguiendo a Braudel, el tiempo largo y el tiempo corto en la historia, como unidad de análisis del alterado momento político que hoy vive el país, tendremos por fuerza que retornar a ese tormentoso 1 de septiembre de 1982, último Informe de Gobierno del presidente López Portillo, cuando, con una crisis económica encima —hasta ese momento la más severa—, decidió nacionalizar la banca³.

A pesar de su importancia, el acontecimiento pareció de inicio un recurso político que se inscribía en el tiempo largo de nuestra historia: en la sólida estructura que formó una revolución como la mexicana; en el particular sistema político que, reñido con el régimen constitucional, legitimó, a pesar de su evidente autoritarismo, de sus prácticas corruptas y clientelares, de la impunidad en las acciones de gobierno, de la existencia de un partido casi único, y de su acostumbrada política electoral antidemocrática, a los llamados gobiernos de la Revolución durante setenta años. Así pareció al menos durante los agitados meses que mediaron entre este hecho y la toma de posesión del nuevo presidente de la República: Miguel de la Madrid Hurtado.

A partir de ese momento, los acontecimientos, propios de un tiempo corto de la historia, comenzaron a no encontrar explicaciones completas y satisfactorias en el tiempo largo. Se percibió la posibilidad del fin del nacionalismo revolucionario y el surgimiento de un nuevo orden neoliberal encaminado a inscribir a México en las hasta entonces inexploradas trayectorias del mundo global⁴. El mito fundador de la nación mexicana, la Revolución, pare-

³ Estas reflexiones sobre los tiempos de la historia en el México contemporáneo, fueron tomadas de Luis H. Méndez B. "El desafuero de AMLO dentro del tiempo corto de la historia" en *El Cotidiano* núm. 132, julio-agosto, 2005, DSCH, UAM-A.

⁴ Es variada y abundante la bibliografía que trata este problema, nosotros recomendamos el seguimiento del llamado proceso de transición en México desde la Revista *El Cotidiano*, UAM-A, 1984-2006.

cía dejar su sitio, en la centralidad del ámbito de lo sagrado, a un nuevo absoluto social: el mercado. Al no encontrarse representados simbólicamente en el tiempo largo de nuestra historia, los acontecimientos comenzaron a entrelazarse de una manera diferente: todo indicaba que en México se estaba construyendo un nuevo tiempo largo, una nueva estructura histórica que, se imaginó, quedaría representada en el absoluto social mercado. Poco a poco, paso a paso, el nuevo gobierno, y los que le continuaron, se empeñaron en desestructurar los valores legitimantes del nacionalismo y sustituirlos por los nuevos valores, igualmente axiomáticos, del mercado. No lo lograron del todo: los resultados, hasta hoy, han sido nefastos para el país⁵.

Desde el inicio del nuevo tiempo histórico, que algunos llaman transición y otros llamamos pertenencia obligada al mundo global, se insistió en una tarea impostergable, todavía inconclusa: la reforma del Estado. Es obvio: si el nuevo absoluto social mercado no construía sus propias instituciones, sus valores no iban a estar lo suficientemente legitimados para imponerse al conjunto de la sociedad mexicana y —lo que resultó peor— habrían de mantenerse en constante lucha con el viejo nacionalismo que, desplazado de la centralidad de lo sagrado, seguía luchando por mantener vivas sus representaciones simbólicas⁶.

Así fue como sucedió. La gran tarea de construir un nuevo pacto social legítimamente requería de una reforma del Estado que nunca llegó. Más allá de las reformas electorales, las viejas instituciones no se modificaron y cada vez mostraban más su insuficiencia para validar las nuevas políticas de un orden neoliberal en construcción que no podía terminar con su adversario: el nacionalismo revolucionario. La economía se estancó y la vida política del país se volvió cada vez más inestable, y mientras la riqueza nacional se concentraba en cada vez menos manos, la pobreza y la falta de oportunidades de los mexicanos se extendía a lo largo y ancho del país⁷.

Hasta hoy, corren más de dos décadas que la clase política en México se debate inútilmente por construir un

⁵ Acerca del absoluto social mercado véase Isidoro Moreno, "¿Proceso de secularización o pluralidad de sacralidades en el mundo contemporáneo?", *Potenza e Impotenza della Memoria*, Roma, Italia, Tibergraph Editrice, 1998.

⁶ Véase Luis H. Méndez B., *Ritos de paso trunco: el territorio simbólico maquilador fronterizo*, "Maquila sacralizada", México, UAM-A-Eón, 2005, pp. 121-168.

⁷ De acuerdo a datos oficiales, el crecimiento promedio anual de la economía en México casi a finales del sexenio giraba alrededor del 1.5%, y según INEGI, el 85% de las familias mexicanas vivían con 5 salarios mínimos o menos.

nuevo orden, después de casi cinco lustros empeñados en destruir las estructuras y los valores del nacionalismo revolucionario, después de veinticuatro años de batallar por imponer una economía de mercado, los resultados no han sido ni remotamente satisfactorios. ¿Cuántas asignaturas pendientes guarda todavía nuestro expediente histórico? ¡Tantas! Es cierto, nuestra inserción al mercado global es un hecho, y muchos de los acontecimientos que a diario registra el país, en especial los económicos, ya no pueden ser explicados por nuestra vieja estructura histórica, pero no menos cierto resulta el hecho de qué cantidad de acontecimientos, casi todos de índole política y social, aún encuentran parcialmente su explicación en aquellas resistentes redes de significación cuya urdimbre formó nuestra cultura nacional después de una revolución popular, mito creador de una patria que todavía hoy sigue determinando gran parte de nuestros comportamientos sociales. En estas condiciones ¿cómo vivir tratando de ser algo diferente y, al mismo tiempo, no abandonar muchas de nuestras tradicionales formas de ser? o, lo que es peor, ¿cómo terminar viviendo sin ser lo uno ni lo otro? ¿cómo reencontrar nuevas formas de identidad social cuando la realidad económica y política del país se ha encargado de construir híbridos? No sabemos quiénes somos y mucho menos sabemos a ciencia cierta hacia dónde vamos. Nuestros comportamientos están guiados por la ambigüedad y la ambivalencia. Sin pacto nacional que aglutine, sin proyecto nacional que guíe, y trastocados los valores que legitiman un orden, hemos transitado de coyuntura en coyuntura, de esperanza en esperanza, sin lograr cerrar el periodo que abrió la realidad política del país a inicios de 1983. El gran vacío político que engendró el nuevo tiempo histórico, los incesantes momentos de ingobernabilidad engendrados por un incontenible alud de acontecimientos que apabullaban el entendimiento de la realidad inmediata, transformaron en inestabilidad política, en estancamiento económico, en violencia social y en pobreza el diario acontecer de los mexicanos⁸.

La coyuntura creada por la crisis petrolera de 1982, que obligó al país a incursionar en los inciertos caminos de la modernidad globalizada; la construida en las elecciones presidenciales de julio de 1988, con su promesa de retorno a un orden nacionalista revolucionario depurado; la en-

⁸ Muchos son los fenómenos de la realidad mexicana actual que demuestran lo aquí dicho, baste como ejemplo ilustrativo la enferma convivencia entre el viejo corporativo sindical y las tendencias laborales modernas de la calidad total, o la existencia de instituciones propias de una democracia procedimental coexistiendo con estructuras partidarias autoritarias y corruptas.

gendrada el 1 de enero de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en oposición al Estado neoliberal mexicano y, en concreto, al inicio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; la del derrumbe financiero de diciembre de 1994, que sepultó las promesas del orden liberal social imaginado por el gobierno salinista, y la del triunfo de la derecha en México en las elecciones presidenciales de julio del 2000 que presupuso, con la caída del PRI, el fin del autoritarismo, el inicio de la democracia y el comienzo del crecimiento económico del país, que hizo suponer al nuevo gobierno y a importantes sectores sociales la edificación de un nuevo pacto social, de un nuevo proyecto nacional, que se engendrarían desde una profunda reforma del Estado. Cuatro sexenios, cinco coyunturas, cinco momentos privilegiados de la historia que, cada uno en su momento, anunciaron —políticamente— la posibilidad de un cambio que cerrara en definitiva el incierto periodo abierto en 1983.

Hoy lo sabemos, no fue así. El desencanto social volvió a imponerse. Los retos abiertos por la coyuntura de 1983, en lo esencial, seguían vigentes, aunque desgastados por el incierto pasar de 24 años sin solución a los grandes problemas nacionales. Nuestro nuevo tiempo histórico acentuó, paulatinamente, su carácter violento: se incrementaron los inquietantes momentos de ingobernabilidad, se deterioró nuestro desarrollo productivo, creció hasta límites moralmente inaguantables la marginación y la pobreza de la inmensa mayoría de mexicanos, se fortaleció un perturbador proceso de concentración de la riqueza y se fue acentuando un peligroso proceso de fragmentación corrupta de la clase política nacional. Las coyunturas no terminaban por resolverse en nuevos periodos. Se volvía, una y otra vez, a los retos planteados desde 1983, representados en una gran meta, en un gran propósito todavía pendiente: la reforma del Estado⁹.

No hace mucho, en 2004, tratamos de definir el gran periodo de una modernidad aún sin rumbo. Hoy, después

⁹ El seguimiento de estos momentos de gran significación en nuestro nuevo tiempo histórico, están consignados en los números de la revista *El Cotidiano* desde el mes de julio de 1984 a la fecha, y más analíticamente en Rosa Albina Garavito y Augusto Bolívar (coordinadores), *México en la Década de los Ochenta. La Modernización en Cifras*, Libros de *El Cotidiano*, DCSH-UAM-A, México, 1990; Luis H. Méndez B. y José Othón Quiroz, *Modernización Estatal y Respuesta Obrera*, Libros de *El Cotidiano*, DCSH-UAM-A, México, 1994; Luis H. Méndez B. (coordinador), *Poder, ideología y respuesta social en México (1982-1996)*, Libros de *El Cotidiano*, DCSH-UAM-A y Grupo Editorial Eón, México, 1997; Luis H. Méndez B. y Miguel Ángel Romero, *México: modernidad sin rumbo (1982-2004)*, DCSH-UAM-A y Ediciones y Gráficos Eón, México, 2004.

de casi dos años, seguimos manteniendo que México se explica desde lo económico y no desde lo político. Es débil nuestro Estado nación y débil también la manera como se legitima desde un poder legal. Es otro el territorio que nos determina, más amplio, más abarcador, supranacional (el TLCAN), perteneciente a su vez al imaginado espacio planetario del mundo global y su mito homogeneizador. Esta distinción nos ayuda a explicar, al menos en parte, el carácter incierto de nuestro desarrollo. Una estructura política sólida es sinónimo de fortaleza y estabilidad; en cambio, una determinación económica extraterritorial es equivalente de inestabilidad, producto del carácter caprichoso, coyuntural, que expresa. Nuestra economía se encuentra inserta en una inmensa red internacional que se impone sobre nuestro Estado nación. Son, en lo esencial, poderes transnacionales quienes nos señalan el rumbo a seguir. Las consecuencias para el país son graves, en especial porque este tipo de determinación favorece, entre otras muchas cosas, la existencia de una sociedad desestructurada. Esto es, mientras más se debilita la determinación política del territorio, más se fortalece la violencia y la impunidad a su interior, generando momentos, cada vez más frecuentes, de ingobernabilidad¹⁰.

México, afirmamos, es un territorio que se define desde la violencia: intrafamiliar, social, política, macroeconómica, criminal; violencia de la pobreza, violencia de la corrupción, violencia del capital frente al trabajo, violencia del sindicato frente al trabajador, violencia burocrática ejercida desde la impunidad, violencia legal contra el desprotegido, violencia del desprotegido contra lo institucional, violencia de género, violencia ecológica, violencia militar, violencia policiaca; violencia que intimida, violencia que confunde, violencia que paraliza, violencia que quebranta, violencia que nos “organiza” la vida, violencia que mata y ¡qué curioso! ¡qué enorme paradoja! violencia que se impone en el marco de nuestra naciente democracia¹¹.

Un nuevo tiempo de coyuntura

En este contexto, un nuevo acontecimiento político, propio del gran periodo inconcluso que vive el país desde 1983, volvió a sugerirnos, ahora en el 2004, que un nuevo tiempo

¹⁰ Véase Luis H. Méndez B. *Ritos de paso trunco... “Construcción simbólica del territorio maquilador”*, *Op. cit.*, pp. 87-120.

¹¹ Tomado de Luis H. Méndez B. y Miguel Ángel Romero, *Op. cit.*, pp. 246-247.

de coyuntura se estaba construyendo. Un suceso distintivo de nuestro tiempo incierto, contingente y riesgoso —el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento Jefe de Gobierno del Distrito Federal— puso en estado de alerta a la sociedad política y a sectores importantes de la sociedad civil. Intuimos que, de este conflictivo proceso de lucha política, podría derivar una nueva coyuntura, otro momento privilegiado de nuestra historia, otra posible ruptura que, al igual que las cinco anteriores, pugnaría seguramente por cerrar el largo e inquietante periodo de ambigüedad política que vivimos desde 1983. Una coyuntura que volvería a plantearse lo que se planteó la primera: realizar una contundente reforma del Estado, políticamente autorizada para formular el perfil del nuevo proyecto nacional. Una coyuntura que, al proponerse terminar con el carácter híbrido de nuestras instituciones, lograra por fin iniciar el proceso de definición política, económica, social y cultural del país, y así poder incursionar, con mayores posibilidades de éxito, en las intrincadas redes del mundo global.

Desde luego, la coyuntura que podría iniciar este nuevo tiempo, no garantizaba por sí misma el cumplimiento de sus promesas. No podemos olvidar el carácter de posibilidad que toda coyuntura contiene, por tanto, teníamos que lidiar también con el hecho, igualmente posible, de que los resultados de la nueva lucha política por el poder, podrían terminar desdibujando incluso más nuestras identidades o, lo que sería peor, el nuevo enfrentamiento entre los actores políticos podría convocar al nunca suficientemente exorcizado fantasma de la crisis económica y a sus catastróficas consecuencias para la sociedad en su conjunto, y ni qué decir sobre la viabilidad de que nuestro largo periodo se resolviera con la imposición de un Estado autoritario disfrazado de democracia.

En realidad, más allá del hecho cierto de que iniciaba un tiempo de coyuntura, uno no podía sino imaginar posibilidades sobre la forma en que se resolvería cuando se hiciera presente. Se nos ocurrían cuatro escenarios posibles: la reforma del Estado y el impulso a la consolidación de una democracia procedimental; la reforma del Estado y el impulso a una democracia con más sentido social; la reforma del Estado retomando su carácter autoritario pero sin perder la investidura de democracia o la nada lejana posibilidad de continuar con un Estado ambiguo y ambivalente de instituciones híbridas proclive a ser integrado cada vez más formalmente a Estados Unidos. Por supuesto, en los cuatro escenarios posibles, existía una constante: el respeto a las reglas señaladas por el orden mundial

globalizado. En los cuatro casos, vale la pena dejarlo asentado, el compromiso con la globalidad estaba asegurado con la responsabilidad de cualquier fuerza política por mantener la disciplina fiscal, la salud de las variables macroeconómicas y el impulso a la sociedad de libre mercado (competencia, productividad, flexibilidad laboral). Ninguna de las fuerzas políticas en competencia, incluyendo las llamadas fuerzas de izquierda inscritas en el PRD, habría de plantearse un cambio en dirección contraria. La izquierda partidaria había reducido su espectro ideológico a la recuperación parcial de los elementos de política social propios del Estado Benefactor. Su estrategia política adoptó muchos de los contenidos de la socialdemocracia europea en los llamados “Años Dorados”¹².

El mundo globalizado y sus representantes nacionales y multinacionales podían, desde esta perspectiva, estar tranquilos. Bien podemos afirmar que, incluso hoy, después de la desaseada contienda electoral que terminó polarizando a la sociedad mexicana, ninguna fuerza política partidaria en el país le resulta amenazante. El problema era —y sigue siendo— de proyectos que se insertan, casi sin problemas, en el orden mundial. Las tres fuerzas partidarias importantes, PRI, PAN y PRD, se distinguen por el peso que le dan a la intervención del Estado en los sectores estratégicos, por sus proyectos en materia de política social, pero, sobre todo, por la defensa o no de los enormes privilegios —legales e ilegales— que mantiene un pequeño sector de la población: la burguesía financiera, apoyada y protegida desde 1983 por el poder del Estado a través de tres gobiernos priístas y uno panista.

Esta era, en lo general, la situación política que creó lo que llamamos un nuevo tiempo de coyuntura. Un representante de esta izquierda partidaria, Andrés Manuel López Obrador, jefe entonces del gobierno del Distrito Federal, había adquirido una fuerza política de tal magnitud que, faltando más de dos años para las elecciones presidenciales, fuera de tiempos electorales y sin siquiera ser considerado todavía como el candidato de su partido, el PRD, era reconocido ya, en diferentes arenas políticas, como el personaje político con mayores posibilidades de alcanzar la primera magistratura de la nación.

Respondiendo fielmente a los principios básicos de la cultura política mexicana, sus adversarios decidieron, a partir de este momento, eliminarlo a como diera lugar de la contienda electoral. Se inicia una guerra sucia al interior de

la clase política que, antidemocrática por principio, se impuso como la principal estrategia de campaña electoral y no electoral para deshacerse del adversario incómodo de la izquierda partidaria. El gobierno de la República, su partido, el PAN, y los todavía dueños de la mayor parte del poder político, el PRI —a veces aliados, a veces por separado— se propusieron exterminar a su adversario perredista de la lucha por la presidencia de la República. A pesar de las nuevas instituciones democráticas, puestas a prueba, con éxito, en la elección presidencial del año 2000, la política partidaria mostró nuevamente su atávico rostro: no se trataba de competir democráticamente en un marco de igualdad y orden, tampoco se pretendía negociar, crear acuerdos o conciliar entre adversarios proyectos de acción política beneficiosos para el país; no, el objetivo fue el de siempre: anular al contrincante de cualquier manera, a cualquier precio —y con violencia. En este caso al más fuerte, Andrés Manuel López Obrador, portador de un proyecto que amenazaba con invalidar los enormes privilegios adquiridos por un cada vez más pequeño grupo de empresarios que, en un acelerado proceso de concentración de la riqueza, habían empobrecido al país y a sus moradores.

El primer acto realizado con esta intención, que aquí consideramos como el inicio de un nuevo tiempo de coyuntura, lo constituyó el desafuero de López Obrador para poder ser juzgado por la autoridad competente por una supuesta desobediencia a la sentencia de un juez de amparo. Un proceso legal de escasa importancia en otros momentos sociales, se convirtió en una descarnada lucha sin cuartel entre los partidos políticos con la interesada intervención del gobierno federal y la acción cómplice del poder judicial.

Después de largos meses de encrespada lucha, de deshonestos; inconvenientes y frecuentemente torpes ataques contra el gobierno del Distrito Federal y su representante legítimamente electo, la Cámara de Diputados decidió, por mayoría, construida por consigna partidaria, desaforar a Andrés Manuel López Obrador. “El Gobierno del Cambio” descabezó a la “Ciudad de la Esperanza”. “¡Es un simple acto jurídico orientado a hacer cumplir la ley! ¡No podemos olvidar que vivimos en un estado de derecho! ¡Nadie por encima de la Constitución!”, se nos hizo saber repetidamente en diversos tonos, espacios y tiempos. Sin embarco, en ésta nuestra democracia imperfecta, la “responsable” disposición al cumplimiento del orden jurídico de la que tanto nos habló la autoridad en el proceso de desafuero, mostró en realidad como el poder en turno, con el incondicional apoyo de las dirigencias partidarias del PRI y del

¹² Término tomado de Eric Hobsbawm, *Historia del Siglo XX*, Barcelona, Crítica, 2003, véase Cap. IX, “Los años dorados”, pp. 260-289.

PAN, se impusieron, a costa de lo que fuera, sobre la voluntad de parte importante de la ciudadanía que, en ese momento, mostraba mayoritariamente su inclinación hacia la solución planteada por la izquierda perredista para enfrentar los desafíos, desde 1983 sin solución, que enfrentaba el país.

El recién iniciado tiempo de coyuntura surgía de un conjunto de conflictos políticos, muchos de ellos intencionalmente no resueltos, que nos revelaban una inquietante posibilidad: el afianzamiento del carácter autoritario de un régimen todavía en formación; sin embargo, este proceso de endurecimiento autoritario desde la sociedad política, develaba también otra posibilidad: que la enorme fuerza emergida de una movilización social sin precedentes obligara a la clase política mexicana a llegar a acuerdos mínimos que permitieran no sólo una transmisión pacífica de poderes en el 2006, sino que facilitara también la construcción de un gran pacto social que ayudara a desenredar el embrollo político que había impedido la reforma del Estado, el afianzamiento de un régimen; en consecuencia, la credibilidad en las instituciones, el fin de un largo periodo de vacío político, de ingobernabilidad. La gran posibilidad: que nuestra embrionaria democracia procedimental comenzara a incursionar en los hasta hoy prohibidos espacios de la sociedad y la economía.

De momento, la decisión presidencial de retirar cargos en contra del Jefe de Gobierno del DF —bastante populista por cierto al pasar, como en los viejos tiempos del presidencialismo autoritario, por encima de una decisión que por mayoría había tomado el Congreso— logró distender un conflicto político que amenazaba con desbordar los frágiles límites legales de un endeble orden en formación. Sin embargo, contrariando la mediática campaña oficial y la insípida reunión entre los dos contrincantes políticos (Vicente Fox y López Obrador), la autoritaria disposición de un presidencialismo encubierto, no garantizaba que terminara la embestida en contra de un candidato y un proyecto de izquierda partidaria con posibilidades de triunfo en las elecciones presidenciales del 2006. Resultaba evidente que la derecha, política y social, el PRI del descompuesto nacionalismo revolucionario, y poderosos grupos empresariales involucrados en confusas, y presuntamente ilegales, operaciones financieras a través del Fobaproa, no habrían de detenerse en sus propósitos por la decisión del Ejecutivo Federal. El conflicto tomó otros derroteros, los de la guerra sucia, en una confrontación que habría de ver rebasados los ya de por sí estrechos límites de nuestra democracia. En los siguientes meses seríamos testigos de una despiadada

lucha por el poder donde el objetivo habría de centrarse en la eliminación del adversario con posibilidades. No asistiríamos a un encuentro de ideas, a una discusión de proyectos o programas a ser difundidos y discutidos por los diversos contrincantes políticos en las diferentes arenas, para, después, ser electoralmente sancionados por el voto ciudadano; no: la intención fue aniquilar, más que el proyecto, la figura del que desde el inicio del tiempo de coyuntura mostró la sensibilidad política y el apoyo popular suficiente para crear el ansiado —y desde hace más de veinte años ausente— proyecto de nación que prometía suavizar, en beneficio de la mayoría de mexicanos, nuestro accidentado camino por el mundo global.

El intento de desafuero de López Obrador habría de ser devorado, en apariencia, por la vorágine de sucesos que a partir de entonces inquietaron a la sociedad y enfermaron más a sus débiles instituciones, haciéndonos sentir y creer que la vida política nacional perdía rumbo y sentido. Sin embargo, reiteramos, de este hecho parte el tiempo de coyuntura que habría de desembocar en un nuevo e inquietante momento de nuestra historia, una nueva posibilidad de ruptura y recomposición política, pero ahora, como nunca, acompañada de una irritante y agresiva significación: la desconfianza¹³.

Los resultados de la contienda electoral

La lucha política por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y su atropellado desenlace producto de una masiva respuesta popular, nos hicieron presagiar, como ya antes mencionamos, el inicio de un tiempo de coyuntura que podría conducirnos a un momento histórico excepcional por las posibilidades que planteaba: por un lado, el proyecto de la izquierda partidaria (PRD), empeñada en construir una nueva idea de nación que incluía, como prioritario, el bienestar social, aunque dispuesto a no abandonar el camino del mundo global; por el otro, la continuación de un largo, ambiguo y hasta hoy fallido proceso de construcción de otra idea de sociedad, en este caso de libre mercado en

¹³ Vale aclarar que cuando hablamos del inicio del tiempo de coyuntura, nos referimos no a una fecha en específico, sino al periodo que comienza en mayo del 2004 y concluye con la renuncia del Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha el 27 de abril del 2005. Doce meses de agitación política y social generados por el proceso de desafuero al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Para conocer los detalles al respecto, se puede revisar, además de la prensa, los artículos que al respecto publica el núm. 132 de la revista *El Cotidiano*, julio-agosto, 2005, DCSH-UAM-A, y el libro de Alejandra Lajous, *AMLO: entre la atracción y el temor. Una crónica del 2003 al 2005*, México, Océano, 2006.

su acepción más ortodoxa, hoy impulsado por la derecha partidaria (PAN), decidida a impedir el retorno de políticas sociales propias de un Estado benefactor; en su opinión, ya superado. Y en medio de estas dos alternativas, un desdibujado proyecto impulsado por la más importante fuerza política del país (PRI), incapaz aún de superar sus contradicciones: la de ser artifice, y heredero ideológico, del Estado nacionalista revolucionario que él mismo se propuso dismantelar para sustituirlo por un proyecto neoliberal a lo largo de tres sexenios (1983-2000). Su profunda ambigüedad, no resuelta, lo ha hecho proclive a una paulatina fragmentación. No es exagerado imaginar que en algún momento puede quedar integrado a cualquiera de los dos proyectos dominantes encabezados por la izquierda y la derecha partidaria, o bien, en un difícil proceso de refundación, y seguramente con la fuerza política disminuida, resurgir como una nueva fuerza partidaria.

La respuesta política, se pensaba, al enfrentamiento programático de los tres principales partidos políticos la daría el resultado electoral del 2 de julio. Se imaginó que el voto ciudadano, protegido por las instituciones electorales (IFE, Cofipe y tribunal electoral) decidiría el rumbo del país. Por desgracia no fue así. Después de 6 meses de una desquiciante contienda electoral, antecedida de largas y alteradas semanas de batalla preelectoral, y de casi tres años de intensa —y frecuentemente antidemocrática— lucha política partidaria en torno a la disputa por la presidencia de la República, el gobierno foxista, los partidos políticos, la ciudadanía y las instituciones electorales, arribaron al 2 de julio en una atmósfera de desconfianza y políticamente maltrechos. No era para menos: desde los turbadores meses del *desafuero*, el ambiente político nacional, ya de por sí descompuesto, arreció su proceso de enrarecimiento. Varios hechos, entremezclados, terminaron por pervertirlo. Cómo no recordar la preocupante debilidad —¿o parcialidad?— del Instituto Federal Electoral después de la autoritaria designación, en el 2003, de los nuevos consejeros electorales y de su presidente, a partir de un acuerdo arbitrariamente decidido e impuesto por el PRI y el PAN ignorando al resto de las fuerzas políticas, en especial al PRD y qué decir de la confusa actuación, por mencionar lo menos, de este mismo Instituto durante los meses de la contienda electoral ni cómo olvidar la militante —por tanto caprichosa, injustificada e insostenible— intromisión del Ejecutivo Federal y de su aparato para favorecer una particular orientación política, la de su partido, ignorando sus obligaciones como jefe de Estado; cómo no hablar de los descompuestos comportamientos de los partidos políticos, que con

harta frecuencia, ignoraron los mandatos de la normatividad electoral vigente, o sus desleales pugnas internas y externas con demasiada frecuencia señaladas por la corrupción, o su compulsiva determinación por eliminar al adversario antes que dialogar con él; cómo dejar de hacer alusión a la ilegal, despótica y parcial injerencia de ciertos sectores sociales, como los empresarios de la televisión, la iglesia católica o, en general, los poderosos señores del dinero, transformados a lo largo del proceso en poderosos grupos de presión política a favor de la orientación de derecha representada por el PAN, todo esto en un desfavorable entorno señalado por la ambigüedad y la ambivalencia, por un vacío político que hizo cada vez más frecuentes los momentos de ingobernabilidad en el país. En suma, la elección presidencial del 2006 y sus inquietantes consecuencias, fueron el reflejo de la incapacidad de una clase política que, desde 1983, se propuso, obviamente sin conseguirlo, reformar al Estado, crear un nuevo pacto social e inaugurar un nuevo proyecto nacional para enfrentar los retos que le planteaba, al nuevo tiempo mexicano, el mundo global.

Es este conflictivo y desaseado proceso político, que creó un frágil entorno para el ejercicio de la democracia electoral, donde ubicamos cualquier tipo de explicación a la elección del 2 de julio del 2006. Y es al llegar a este momento culminante que tenemos que comenzar a preguntarnos si el tiempo de coyuntura, tal como lo imaginamos, terminó creando, con estas elecciones, una nueva posibilidad de transformación política en el país, o si, por el contrario, seguiremos soportando las preocupantes inercias de un orden en construcción. Evidentemente, es pronto aún para responder. Faltan elementos que arrojen claridad sobre esta cuestión. Sin embargo, y a sabiendas de que la realidad política del país todavía tiene mucho que decir, nos aventuramos con la hipótesis del continuismo: pensamos el 2 de julio del 2006 como una coyuntura más —la sexta en 24 años— que se frustra.

La elección reveló un hecho inédito que, por sí mismo, explica, al menos formalmente, el beligerante rumbo que tomó la disputa política después del día de la elección: por primera vez en la historia reciente del país, los resultados no dieron un claro ganador de la contienda, situación que, aunada al ambiente de desconfianza prevaleciente en el ámbito político y extendido ya al ámbito social, hizo del proceso postelectoral un tiempo de incertidumbre donde privó el rumor y la especulación; tiempo contingente, tiempo riesgoso, que transportó nuestro imaginario a aquel no tan lejano episodio del fraude electoral en 1988. Por supuesto, ni fueron las mismas circunstancias políticas ni eran

iguales las fuerzas sociales que hoy se miden, pero, como buen imaginario, registró de inmediato la huella del fraude en una gran parte de la población¹⁴.

Varios fueron los acontecimientos que favorecieron la creación de un imaginario de fraude entre la ciudadanía, y bien podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el origen inmediato lo encontramos en el errático comportamiento de las instituciones electorales y de las grandes lagunas que mostró el Código Federal Electoral para dar respuesta legal y sanción oportuna al sinfín de irregularidades que mostró la contienda electoral. La incapacidad de la autoridad electoral —¿o el temor? ¿o la complicidad?— para castigar la guerra sucia del Partido Acción Nacional en contra de la oposición de izquierda¹⁵, o la ilegal intromisión del Ejecutivo Federal a favor de su partido, o la mal intencionada —y por supuesto también delictiva— ingerencia de poderosos sectores de la sociedad civil, como las cúpulas del empresariado nacional, la alta jerarquía de la iglesia católica o los medios electrónicos y gran parte de los medios impresos para impedir el avance de la oposición de izquierda, o la bien ideada acción del Partido Nueva Alianza (PANAL) para jugar a favor del candidato panista¹⁶, acompañado todo

¹⁴ Imaginario no es igual a representación falsa o equivocada de la existencia, es una construcción simbólica particular a través de la cual se explica la realidad o parte de ella. Es abundante la bibliografía al respecto, citamos aquí un texto ampliamente reconocido por los estudiosos del tema: Cornelius Castoriadis, *La institución imaginaria de la sociedad*, Tusquest, Barcelona, 1983.

¹⁵ Hablar de la guerra sucia del Partido Acción Nacional es sólo un eufemismo, resulta más claro bautizarla como una guerra del miedo, técnica, política y financieramente planeada por este instituto político, que se plasmó en un conjunto de acciones orientadas —pensamos que con éxito— a cambiar la intención del voto de parte importante de la población que sufragó. Es fácil reconstruir esta historia, basta revisar la prensa nacional, recordar los spots publicitarios del PAN por la televisión, o simplemente traer a la memoria los miles y miles de mensajes que se difundieron a nivel empresa, iglesia o telefónico a lo largo y ancho del país, para ubicar el daño que este tipo de acciones le causó no sólo a su contrincante y a su partido, sino principalmente a nuestra frágil democracia. Andrés Manuel López Obrador, se difundió, era un peligro para México, se recomendaba no votar por un candidato que “te va a quitar tu casa”, “que te va a dejar sin empleo”, que estaba relacionado con los grupos armados en el país, que mantenía una alianza desestabilizadora con el presidente de Venezuela, etc., etc., etc.

¹⁶ La existencia y los comportamientos político-electorales del Panal, antes, durante y después del proceso electoral, son un ejemplo fehaciente del carácter anfibiológico de la realidad mexicana actual. Surge de la fuerza política-corporativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en otro tiempo bastión importante del orden nacionalista-revolucionario a lo largo de los gobiernos priístas. Producto de pugnas internas —prácticamente desde el inicio del sexenio actual— entre la dirigencia sindical —emblemáticamente representada por su líder “moral” la maestra Elba Esther Gordillo— y el desarticulado PRI, representado por Roberto Madrazo posteriormente candidato de su partido a la

esto de un largísimo tiempo histórico —1810-2006— que creó y fortaleció entre los mexicanos una poderosa cultura de la desconfianza, hizo que, cuando en la noche del 2 de julio el Instituto Federal Electoral y las empresas encuestadoras anunciaran su decisión de no hacer públicos los resultados electorales por lo cerrado de la competencia presidencial, el fantasma del fraude se instalara en las mentes de una gran mayoría de ciudadanos votantes.

El candidato del PAN se declaró de inmediato vencedor, el del PRD —¿por qué quedarse atrás?— realizó la misma acción ilegal, y el IFE, ante el incierto y amenazante entorno político, dejó que hablara por él el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero sin hacer del conocimiento público la existencia de un archivo especial que concentraba el cúmulo de actas con inconsistencias que había arrojado el proceso. Al final, los resultados del PREP oficializaron el apretado resultado entre PAN y PRD —poco más de medio punto porcentual— y el Presidente del IFE, contraviniendo la ley, declaró vencedor al candidato del PAN y, poco después, cuando las fuerzas perredistas denunciaron el ocultamiento por parte del IFE del archivo de inconsistencias, se acaloró el sentimiento de sospecha, y la suspicacia y el recelo político congelaron cualquier posibilidad de diálogo entre las fuerzas enfrentadas. La idea de fraude se instaló en las fuerzas opositoras de izquierda, y la enorme movilización social que generó la demanda política de *voto por voto casilla por casilla* mostró, para los presuntos ganadores, amenazantes atisbos de una violencia social que nunca se dio¹⁷. En este ambiente político descompuesto,

presidencia de la República, la autoritaria señora de los destinos del SNTSE inicia un acercamiento con el gobierno foxista —neoliberal— que terminará rompiendo el pacto corporativo con el PRI, para iniciar una nueva alianza, igualmente corporativa con el PAN, que culminará con la formación del Panal. La estrategia electoral fue clara y determinante: gran parte de los integrantes del nuevo partido, casi todos maestros, votaron corporativamente, por un lado, por sus candidatos a diputados y senadores, por el otro, por el candidato del PAN para presidente. En una elección tan cerrada, estos votos fueron definitivos. El candidato panista le debe en gran medida la presidencia a este partido, y se lo van a cobrar.

¹⁷ Fue monumental y enormemente llamativa la respuesta ciudadana organizada por el equipo de AMLO con el apoyo del PRD en la lucha postelectoral. Cuatro marchas que, por la enorme cantidad de asistentes, terminaron por transformarse en enormes plantones que cubrían todo el Centro Histórico, la Alameda Central por Av. Juárez y buena parte de Reforma, en una ocasión, hasta el Museo de Antropología. Entre uno y tres millones de manifestantes corearon hasta el agotamiento la consigna que los había llevado a la calle en un inusual acto de identificación colectiva: *voto por voto y casilla por casilla*, y no fueron escuchados. Al reclamo ciudadano, oídos sordos. Ni los actores políticos, a excepción del PRD, ni la autoridad electoral, tomaron en cuenta la voz de los de abajo. Ante la cerrazón, el movimiento social se radicalizó, y, sin sobrepasar la lucha pacífica, se constituyó en plantón permanente, y el día 16

no resultó para nada extraño la propuesta del IFE de contar las actas para certificar los resultados del PREP, aunque nada extraño resultó tampoco el resultado que confirmaba lo que ya antes había declarado el IFE: el apretado —¿planeado?— triunfo del candidato del PAN. La desconfianza se impuso a la oposición partidaria y en las redes ciudadanas se acrecentó la sospecha y subió de tono la irritación. Sólo quedaba ya la voz del Tribunal Federal Electoral para salvar la credibilidad de las instituciones democráticas, y esa voz autorizada terminó por ahondar el escepticismo de buena parte de los mexicanos en la recuperación de nuestra enfermiza democracia.

En efecto, después de agitadas semanas de confrontación política e inusual movilización social, el Tribunal Federal Electoral emitió su fallo¹⁸: calificó como válida la elección presidencial y declaró a Felipe Calderón Hinojosa presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, de conformidad con el artículo 99 párrafo cuarto fracción segunda de la Constitución. Y en cuanto a las impugnaciones sobre un conjunto de irregularidades al proceso electoral presentadas por la Coalición por el Bien de Todos, el tribunal estimó que, si bien muchas de ellas fueron contrarias a la ley, no podía calcularse el impacto sobre la elección. La difusión, consideró, de mensajes emitidos a través de los medios electrónicos e impresos por las fuerzas partidarias y por fuerzas sociales convertidas en grupos de presión, como el Consejo Coordinador Empresarial, era ilegal y sin duda generó efectos negativos que atentan en contra del principio de la libertad del voto en tanto que pudieron constituir un factor determinante que influyera en el ciudadano para orientar su elección en determinado sentido. Sin embargo, consideraron que, a pesar de la existencia del conjunto de irregularidades señaladas

de septiembre, en Convención Nacional Democrática. La respuesta fue más que evidente: una gran parte de la población decidió no reconocer el triunfo del candidato panista a la presidencia de la República. Fue interesante advertir la cualidad de la movilización social. Por siempre, la movilización social en México mostraba su cariz corporativo. Eran las organizaciones sociales, campesinas y sindicales las que marchaban, ahora, por primera vez, predominó el ciudadano. De las grandes pancartas grupales a la denuncia individual a través de carteles improvisados. El movimiento corporativo en México comenzó a transformarse en movimiento social. Para advertir las diferencias entre uno y otro desde una perspectiva teórica, revisar los números 28 y 29 de la Revista Sociológica, UAM-A, 1995, dedicados a los movimientos sociales desde diferentes perspectivas de análisis sociológico.

¹⁸ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, *La Calificación Presidencial*, véase la prensa nacional en la última semana de agosto para revisar el documento y su impacto político.

por la oposición de izquierda, “la sola existencia de algunos spots o mensajes negativos es en sí misma insuficiente para concluir, indefectiblemente, que se ha afectado el principio de la libertad del voto”. En su opinión, “no existen elementos que permitan establecer de manera objetiva que la intención del voto de los electores fue afectada preponderantemente por la difusión de spots negativos”.

Más adelante se insiste en que sí hay un vínculo temático y una consonancia entre los spots emitidos por el PAN y los del Consejo Coordinador empresarial, y vuelven a afirmar que existe una violación legal que quebranta los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral, pero se insiste en que “por sí misma, no es determinante para el resultado de la elección ya que no obran elementos probatorios en autos que demuestren fehacientemente el impacto de los spots difundidos por el CCE”. Y la misma cantaleta jurídica la repiten para el caso de la intromisión de la empresa Jumex a favor del PAN o de la intervención de varias empresas mercantiles: no hay medio de prueba alguno para establecer el impacto que pudo haber tenido en el proceso electoral.

En cuanto a las ilegales intervenciones del presidente Vicente Fox, el tribunal consideró que, si bien pudieron contribuir en alguna forma para determinar la intención del voto, esta influencia se vio disminuida por diferentes aspectos (la tregua navideña, el acuerdo de neutralidad y la orden decretada por la corte de suspender la publicidad institucional); sin embargo, el tribunal acepta que, de no haber sido por estas restricciones, las declaraciones del presidente de la República se hubieran constituido en un riesgo para la validez de los comicios y podrían haber representado un elemento importante en el resultado final de la elección.

En suma, para el tribunal, los factores de atropello a la normatividad en los comicios fueron evidentes, pero, en su apreciación —pensamos que con escaso sustento legal— no era posible medir el impacto que tuvieron sobre la intención del voto. De manera por demás subjetiva, ligera y poco apegada a la reflexión jurídica, resultaba inútil, desde su muy parcial perspectiva, cualquier esfuerzo orientado a precisar el impacto que sobre la elección presidencial tuvo el amplio conjunto de irregularidades que, a lo largo del proceso, se advirtieron. Fue poco afortunado —jurídica y socialmente— el fallo del tribunal. Aún queda impreso en la memoria de millones de mexicanos la desconfiada interrogante sobre por qué no recurrieron al *voto por voto y casilla por casilla*; por qué no investigaron a fondo las principales causales que podrían haber orientado su juicio hacia la nu-

lidad abstracta de la elección; por qué no se tomaron el trabajo de indagar, a fondo e imparcialmente, con la información a su alcance, el impacto que tanta irregularidad tuvo sobre la intención del voto. Su decisión terminó polarizando aun más a las fuerzas políticas en pugna y exacerbando el descontento social. El gigantesco movimiento ciudadano de protesta se había transformado ya en plantón y, después del restringido fallo emitido por el tribunal, se constituyó una Convención Nacional Democrática que decidió, entre otras cosas, desconocer el veredicto de la magistratura.

La incertidumbre sigue comandando los procesos políticos, y la violencia amenaza los comportamientos de los actores sociales involucrados. Persiste la intranquilidad y la molestia social, se consolida la cultura de la desconfianza, aumentan los momentos de ingobernabilidad en el país, y el descontento ciudadano se instala más allá de los procesos electorales (qué mejor y preocupante ejemplo que el conflicto en Oaxaca).

Las desventuradas consecuencias de una coyuntura no resuelta

En lo inmediato, la coyuntura creada por la elección presidencial mostró las enormes debilidades de nuestro sistema democrático-electoral. Las instituciones responsables, en contra de lo publicitado a lo largo del proceso, y en contra también de su corto —y se nos hizo creer que exitoso— historial, se manifestaron incapaces, en esta ocasión, de hacer creíble el proceso de elección presidencial y de manejar con buen juicio la crisis política que generaran. Las consecuencias, hasta hoy, son graves. En lugar de consolidarse nuestro sistema democrático, el país se polarizó e inició un riesgoso proceso de enfrentamiento político al margen de los marcos establecidos por la ley electoral. A la lucha política partidista se le agregó un nuevo elemento: el ingrediente social. La disputa por el poder desplazó la desavenencia programático-partidista, para transformarse en conflicto social. El enfrentamiento rebasó a los partidos políticos y mostró con mayor claridad lo que cotidianamente se disimula: el encuentro clasista, la distinción geográfica, el comportamiento racista y discriminatorio, y el enorme abismo existente entre ricos (cada vez menos) y pobres (cada vez más).

En lo concreto, la coyuntura mostró dos grandes bloques, dos posiciones políticas, dos formas diferentes de entender la realidad nacional, dos visiones de nación que, hasta hoy, se muestran irreconciliables. Por un lado, la alianza que apoya el programa del candidato perredista, Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO), sintetizado en una proclama política con marcada orientación social: *Por el Bien de Todos Primero los Pobres*, integrada por los cuadros partidarios del PRD, PT y Convergencia, y, de manera prioritaria, por las extensas redes ciudadanas (movimiento social en formación), creadas desde el liderazgo de AMLO, cuyo origen social es la pobreza. Entre estas dos grandes fuerzas navegan, de forma no definitiva y cambiante, algunas organizaciones obreras, grupos de intelectuales, organizaciones no gubernamentales y sectores de clase media.

Por el otro, el conjunto de poderes políticos y sociales que se aglutinan alrededor del programa de Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional, formalmente reconocido como triunfador de la contienda electoral por la presidencia de la República. A este bloque lo distinguen, además de los militantes panistas, los grandes empresarios organizados, gran parte de los dueños de los medios electrónicos e impresos, la cúpula clerical de la iglesia católica, los viejos líderes corporativos inscritos en el Congreso del Trabajo, los líderes, igualmente corporativos, del poderoso sindicato nacional de maestros, el SNTE, y, por supuesto, el aparato de Estado y la política utilización de sus programas sociales.

A diferencia del primer bloque, éste no formula con claridad un programa de gobierno alternativo, por tanto, podemos ubicarlo dentro de la línea del continuismo: una sociedad de libre mercado imperfecta que convive, negocia, manipula o se enfrenta a un nacionalismo anacrónico. La permanencia de lo ambiguo y lo ambivalente en el quehacer de la clase política, en la indefinición de las instituciones y, en lo general, en la permanente pérdida de identidades dentro de la sociedad civil, continuará definiendo el contexto del orden social impreciso que hoy determina a la nación Mexicana. Cualquier tipo de acción de gobierno orientada a consolidar un orden neoliberal —la reforma energética, por ejemplo— encontrará la oposición del bloque opositor de la izquierda en sus dos vertientes: como movimiento social y como segunda mayoría parlamentaria en el Congreso y cualquier proyecto institucional destinado a mejorar los niveles de vida de la población marginal se topará también con la oposición de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que, por encima incluso de la ley y en defensa de sus privilegios, impulsaron a como diera lugar el triunfo del candidato panista.

Hasta el momento, ni al interior de la clase política mexicana, ni dentro de las fuerzas sociales enfrentadas, ni en la interrelación entre la una y las otras, se muestra disposición al diálogo. En este problemático entorno, el nuevo

gobierno difícilmente logrará salir del vacío político que, al menos desde el 1 de enero de 1994, vive el país, y seguirá padeciendo, en diversos territorios —especialmente en aquellos donde florece la pobreza— tiempos de ingobernabilidad cada vez más alargados. Resulta problemático imaginar que enfrentará con éxito el reto de hacer crecer a la economía mexicana más allá del equilibrio macroeconómico, que enfrentará decididamente la apremiante necesidad de fortalecer y encadenar nuestra planta productiva a través de la modernización tecnológica, la productividad y la competencia externa, y que aceptará el inaplazable esfuerzo por combatir con eficiencia y realismo político la generalizada situación de pobreza que sufren la inmensa mayoría de mexicanos. Es discutible suponer cambios sustanciales a las instituciones responsables de impartir la justicia, de afianzar la seguridad social, de resolver los acuciantes problemas de seguridad pública, de eficientar el sistema educativo nacional, etc. Es complicado concebir, insistimos, que exista la voluntad y la fuerza política en el gobierno calderonista para terminar con las cada vez más dilatadas inercias de inmovilidad y pasmo que han acompañado a los últimos cuatro gobiernos, incapaces de definir con claridad, sin ambigüedades y sin ambivalencias, el rumbo de la nación.

¿Podrá el presidente electo unificar a los mexicanos en un proyecto? ¿podrá terminar con la creciente polarización social, con el encono, con los agravios y con la inquietante preocupación de enfrentamientos sociales? Es difícil opinar en afirmativo. ¿Cómo satisfacer las exigencias de los señores del dinero, responsables directos de su triunfo —las famosas reformas estructurales pendientes— sin afectar los intereses y sin incrementar el peso de las afrentas a los integrantes del otro bloque, ahora organizado para la lucha civil y legislativamente fuerte?

En lo inmediato, tendría que crear una mayoría en la Cámara de Diputados —335— que pueda intentar las modificaciones constitucionales necesarias para lograr las transformaciones exigidas por sus aliados para privatizar el sector energético y modificar la estructura fiscal del país. Reto difícil de superar ante el considerable incremento de curules alcanzado por el PRD en las elecciones de julio, y de sus reales posibilidades de alianzas con otros partidos. El calderonismo encuentra un ambiente sumamente adverso. No sería exagerado afirmar que el Poder Legislativo se convierta, en especial el Senado de la República, en el contenedor de las políticas neoliberales.

Para revertir este escenario, el presidente electo tendría que hacer realidad las promesas incluidas en sus primeros discursos: gobierno de coalición y programa compartido,

que incluye como temas prioritarios de gobierno la tolerancia, la seguridad, la educación y la justicia, problemas todos tratados como centrales por los aspirantes a la presidencia de la República. Incluso, aunque de manera sesgada, aceptó declarativamente la bandera política del lópezobradorismo: *Por el Bien de todos Primero los Pobres*. Para su desgracia, los acontecimientos indican que, pensando cuando menos en el corto plazo, una reconciliación política con este fin se percibe poco probable, su adversario más fuerte: el bloque ciudadano-partidista abanderado por López Obrador no muestra el menor interés por ello; y resulta poco probable, también, que logre alcanzar la autonomía necesaria, básica, indispensable, para gobernar sin la influencia del poderoso bloque económico y político que lo puso en la silla presidencial. Se advierte entonces una línea de continuismo político-económico que empantamará, por seis años más, las posibilidades de un cambio definitivo de orden institucional que nos defina nuevamente como nación, sólo que, ahora, en un entorno político más enrarecido y proclive a incrementar la violencia social. Es muy factible suponer que esta coyuntura se agregue a la ya larga lista de momentos históricos privilegiados en que los actores políticos y sociales, inmiscuidos en nuestro largo periodo de modernidad sin rumbo, pudieron definir el inquietante tiempo de incertidumbre que vive el país desde 1983.

A manera de conclusión un breve recordatorio histórico

Ratificamos el carácter ambiguo con el que, desde el inicio de este escrito, definimos el entorno en que se dio la coyuntura del 2 de julio del 2006; y confirmamos también que dicho entorno abarca, cuando menos, el periodo sin soluciones definitivas que inició el país, obligadamente, en 1983. Ambiguo, por la contradicción no resuelta entre redes de significación cultural de un pasado nacionalista arraigados con fuerza en la conciencia de la clase política mexicana y que aún determinan de manera importante su comportamiento (corrupción, clientelismo, compadrazgos, caciques, caudillos, imaginarios corporativos...), y las frágiles construcciones ideológicas de un orden neoliberal que pretende imponer —con muy relativo éxito— una sociedad de libre mercado (democracia, libertad, derechos humanos, productividad, competencia, calidad total...). Y si históricamente queremos ser más estrictos para definir como ambiguo el incierto, contingente y riesgoso tiempo de construcción de un orden neoliberal en México, tendremos que hacer alusión a un conjunto de elementos problemáticos

que se remontan al origen de nuestra existencia como nación independiente —en realidad más lejos— y que todavía se encuentran distanciados de soluciones posibles. Nos referimos en concreto, y de manera especial, a las dos grandes discordancias que atraviesan nuestra historia patria, a las dos grandes paradojas que, después de casi 200 años —seguramente más— siguen sin resolverse y continúan redefiniendo la vida política y social de la nación mexicana: por un lado, legalidad contra legitimidad, por el otro, justicia contra legalidad.

Un somero repaso por los grandes acontecimientos desde los cuales tratamos de leer nuestra biografía, o más importante aún, un reconocimiento del anónimo caudal de nuestro histórico tiempo largo, nos hará topár, obligadamente, a cada paso de nuestro acontecer, con estas dos grandes calamidades que hoy hacen imposible consolidar una sociedad democrática que supere su simulado estatus de autenticidad. Toda la lucha social en México, toda la lucha política opositora, termina por resolverse en el desigual equilibrio de estos factores: la legalidad se traga a la legitimidad, y la justicia siempre se desdibuja ante lo normativo. Nuestro tiempo actual no escapa a esta lógica. Hoy tenemos un nuevo presidente, legalmente reconocido, pero

ilegítimo ante la vista de millones de mexicanos. Hoy, por enésima vez en el accidentado transcurso de nuestra historia, la legalidad logró disimular a la justicia. Otra vez lo ambiguo nos señala, nos hace ambivalentes y nos convierte en híbridos.

El problema sin embargo, va mucho más allá de un proceso electoral por conflictivo que haya sido, es una complicación más grande, es un dilema de cultura nacional: ¿cómo ser legítimo en un marco de legalidad?, ¿cómo alcanzar la justicia social sin tener que violentar el derecho?, ¿cómo hacer valer la dignidad y el respeto social sin transgredir la norma? El nuevo presidente poco puede hacer para compensar este desequilibrio histórico. No cuenta ni con el poder ni con la voluntad política para suavizar el agravio enraizado en la memoria de decenas de generaciones lastimadas por la miseria, humilladas por el despojo realizado a sus derechos fundamentales e ignoradas por un poder, al parecer inmarcesible, que nunca ha tenido la costumbre de ver y mucho menos de escuchar hacia abajo. Nuestro querido México de las tres revoluciones no ha logrado conciliar legalidad y justicia, y por ello, la legitimidad política continuará, como siempre, en entredicho... y no pensamos que hoy existan condiciones para sanar tan profundas heridas.



Universo Estudiantil
El portal académico de México

artículos • noticias • resúmenes
• bibliografía • universidades
• actividades • foros

www.universoe.com